

Santiago, veintiséis de mayo de dos mil veinticinco.

Al escrito folio N°6: a todo, téngase presente.

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción de sus fundamentos quinto a octavo, que se eliminan.

Y teniendo en su lugar y además presente:

1º) Que, los hechos que se le imputan al amparado habrían acaecido el mes de marzo de de 2018, y el mismo fue formalizado el 05 de febrero de 2025, lo que no fue controvertido en esta sede.

2º) Que, al tratarse en este caso de un delito de estafa cometido, ilícito previsto y sancionado en los artículos 467, con relación al 470 del Código Penal, sitúa estos hechos en la categoría de simple delito y por lo tanto, sujeta a prescripción de la acción, en el plazo de cinco años.

3º) Que sentado lo anterior y conforme al artículo 233 del Código Procesal Penal, es la formalización la que suspende la prescripción de la acción penal, cuestión que sólo ocurrió como ya se dijo el 05 de febrero de 2025.

Corolario de lo anterior, es que, a la época de la formalización, contados desde la ocurrencia de los hechos, habían transcurrido los cinco años de prescripción que establece el Código Penal y, por tanto, la acción penal derivada del ilícito se encuentra prescrita. Conclusión que no resulta alterada por la salida del país que presenta el amparado conforme al informe de extranjería y la inexistencia de condenas posteriores, según se advierte de su extracto de filiación.

4º) Que, en este sentido, ni la sola presentación de la petición de formalización ni la querella criminal, interpuesta con fecha 16 de octubre de 2019, tienen la virtud de suspender el plazo de prescripción de la acción penal, ello por no ser considerado por el legislador como en medio expreso para dichos fines y, por cierto, una interpretación por analogía que homologue dichas actuaciones al acto de formalización se encuentra vedado conforme lo dispone el inciso final del artículo 5 del Código Procesal Penal.



5°) Que, así las cosas, la actuación impugnada por la presente acción constituye una afectación al derecho constitucional invocado por la parte recurrente, toda vez que lo expone a una sanción, encontrándose su responsabilidad extinta.

Por estas consideraciones, y visto además lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de la República, se **revoca** la sentencia apelada de doce de mayo de dos mil veinticinco, dictada por la Corte de Apelaciones de San Miguel en el Ingreso Corte N° 522-2025, y en su lugar se resuelve que se **acoge** el amparo constitucional intentado en estos autos, en favor de Carlos Jaime Oscar de la Cruz Varela, dejándose sin efecto la resolución reclamada, disponiéndose en su lugar, la prescripción de la acción penal y el consecuente sobreseimiento definitivo al tenor del artículo 250 d) del Código Procesal Penal en causa seguida en RIT 10363-2019 del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.

Acordada con el voto en contra de la Ministra Sra. Letelier y Sra. Gajardo, quienes estuvieron por confirmar la decisión en alzada, teniendo únicamente presente para ello, que una Corte de Apelaciones no puede erigirse en revisora de las decisiones de un tribunal de la misma jerarquía.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Rol N° 17022-2025.





Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Leopoldo Andrés Llanos S., María Teresa De Jesús Letelier R., María Gajardo H. y los Abogados (as) Integrantes Álvaro Rodrigo Vidal O., Eduardo Nelson Gandulfo R. Santiago, veintiséis de mayo de dos mil veinticinco.

En Santiago, a veintiséis de mayo de dos mil veinticinco, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

